



**REPÚBLICA DE COLOMBIA**  
**RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO**



**JUZGADO TERCERO PENAL MUNICIPAL**  
**MOCOA, PUTUMAYO**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Auto Interlocutorio:</b> | Acción de tutela de 1ª instancia No. 0200                 |
| <b>Radicación interna:</b>  | 86001400400320240057700                                   |
| <b>Accionante:</b>          | Jaime Andrés Carmona Suarez y Johana Andrea Posada Prieto |
| <b>Accionado:</b>           | Gobernación del Departamento del Putumayo.                |

Mocoa (P), quince (15) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024).

Procede el despacho a resolver la acción de tutela promovida por los señores Jaime Andrés Carmona Suarez y Johana Andrea Posada Prieto, identificados con cedula de ciudadanía No. 14.465.639 y 36.561.793, quien actúan por medio de mandatario judicial y en contra de la Gobernación del Departamento del Putumayo, en uso de la facultad constitucional consagrada por el artículo 86 de la Constitución Política, para efectos de que se le protejan los derechos fundamentales al debido proceso, defensa, igualdad y acceso a la justicia.

**SE CONSIDERA:**

La acción de tutela se halla consagrada en el artículo 86 de la Constitución Política con el fin de que toda persona pueda reclamar ante los jueces por sí misma o por quien actúe en su nombre, la protección inmediata de sus derechos constitucionales fundamentales, cuando estos resulten vulnerados por acción u omisión de cualquier autoridad.

De conformidad con el artículo 5 del Decreto 2591 de 1991, la acción de tutela procederá contra toda acción u omisión de las autoridades públicas, que hayan violado, viole o amenace violar cualquiera de los derechos que trata el artículo 2 ibídem, de otra



parte, y de acuerdo al Decreto 1983 de noviembre 30 de 2017, expedido por el Ministerio de Justicia y del Derecho, en su parte motiva modifico el reparto de tutela, y así que en su parte resolutive en el artículo 1º y 2º, numeral 1º, establece que *“Las acciones de tutela que se interpongan contra cualquier autoridad, organismo o entidad pública del orden departamental, distrital o municipal y contra particulares, serán repartidas, para su conocimiento en primera instancia a los jueces municipales”*.

De acuerdo con el artículo 37 del Decreto 2591 de 1991, es esta Judicatura es competente para conocer de la misma, en atención a que la entidad que presuntamente vulneraron los derechos de la accionante tiene su asiento en esta localidad, por lo tanto, hay lugar a la admisión.

### **MEDIDA PROVISIONAL**

Respecto al estudio de la medida provisional solicitada, es pertinente remitirse a lo preceptuado en el artículo 7º del Decreto 2591 de 1991, que establece la posibilidad de suspender la aplicación del acto que amenace o vulnere el derecho fundamental que se pretende proteger, en los siguientes términos:

“MEDIDAS PROVISIONALES PARA PROTEGER UN DERECHO. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere.

Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el Juez podrá ordenar lo que considere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. (...)”

Como se puede observar, la concesión de esta medida está supeditada a la apreciación del juez sobre la necesidad y urgencia para la protección del derecho del que se predica la posible vulneración, apreciación que deber realizarse, a partir de circunstancias específicas y prueba manifiesta de la violación de los derechos fundamentales.

Dentro de la medida provisional solicitada por el señor apoderado, en la que se contrae “para evitar el incremento de los perjuicios causados y que se causen otros daños”, que



es la misma de sus pretensiones que conlleva a la revocatoria parcial o aclaración de las resoluciones No. 059 y 158 de 2024 y en especial al levantamiento de la medida cautelar ordenada en contra de sus presentados, considera el Despacho que claramente se ataca el hecho de que por cuenta de la Gobernación del Departamento del Putumayo no se haya aceptado el recurso de apelación contra la mencionada decisión, lo que conlleva a que una vez se escuche a la contraparte y se haga el acopio de las pruebas deba resolverse dicha acción, pues cualquier decisión que se tome en el momento resultaría inocuo en el ejercicio de la presente acción.

Bajo dicha apreciación considera la judicatura que la misma por el momento no es procedente, pues frente a lo planteado, se tiene que la Corte Constitucional ha decantado que excepcionalmente se puede ordenar una medida provisional, cuando se trate de evitar un perjuicio irremediable, que para el caso que nos ocupa no lo ha demostrado la activa y por ende, será ya en la decisión de fondo en la que se determine si hay lugar o no a despachar favorablemente sus pretensiones, máxime si en cuenta se tiene que la tutela al ser un mecanismo expedito, resolverá dentro de ese término las presuntas vulneraciones alegadas por quien acude al amparo, sin que se logre extraer que durante ese lapso su situación se pueda tornar más gravosa.

Por último, se encuentra pertinente vincular dentro del ejercicio de la presente acción constitucional al Consorcio Vías del Putumayo, Compañía Mundial de Seguros, Bancolombia y Juzgado Primero Civil Municipal de la localidad.

Por reunir los requisitos de ley, el Juzgado Tercero Penal Municipal De Mocoa – Putumayo,

### **RESUELVE:**

**PRIMERO.** - ADMITIR la presente acción de tutela interpuesta por los señores Jaime Adres Carmona Suarez y Johana Andrea Posada Prieto, identificados con cedula de ciudadanía No. 14.465.639 y 36.561.793, en contra de la Gobernación del Departamento del Putumayo.

**PARAGRAFO:** Vincular al Consorcio Vías del Putumayo, Compañía Mundial de Seguros, Bancolombia y Juzgado Primero Civil Municipal de la localidad.



**SEGUNDO.** - COMUNICAR a la entidad accionada y vinculadas, de la iniciación de esta acción, haciéndole entrega de la solicitud de tutela, e igualmente solicitándole se sirvan manifestar lo que tengan que decir a su favor y haga alusión a los hechos manifestados por el accionante.

**TERCERO** - El término para contestación la presente demanda es de dos (2) días, contados a partir del recibo de la notificación.

**CUARTO** - La contestación de tutela se realizará por el representante de la entidad accionada o por quien tenga la facultad para hacerlo, y para tal efecto allegará constancia y/o documento que así lo acredite.

**QUINTO:** Negar la medida provisional deprecada por los accionantes.

**SEXTO:** como pruebas legalmente aportadas al proceso los documentos anexados a la demanda.

**SEPTIMO:** Reconocer personería para actuar en el presente asunto, al abogado Hugo Salazar Peláez, identificado con la C.C. No. 14.961.435 y T.P. No. 11.972 del C.S.J.

**Notifíquese y cúmplase**

*Firma electrónica*

**Tania Marcela Martinez Muñoz**  
**Jueza**

**Firmado Por:**  
**Tania Marcela Martinez Muñoz**  
**Juez**  
**Juzgado Municipal**  
**Penal 003**  
**Mocoa - Putumayo**

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **960563e3d1157ec8ac0f9ac1fdc23d8b368f855ceee22f03619c91f6bc20c6ff**

Documento generado en 15/11/2024 04:17:33 PM

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**